

“Jorge Cuarenta”: política, narcotráfico y economía ilegal en el Cesar



FOTO: CORTESÍA REVISTA SEMANA COPYRIGHT 2005

El 16 de agosto de 2003, unas semanas antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores, Cristian Moreno y Abraham Romero, candidatos a la gobernación del Cesar, anunciaron en Valledupar que retiraban sus postulaciones. Hernando Molina Araujo quedó entonces como candidato único a la gobernación. Molina es hijo de la Cacica Consuelo Araujo y pertenece a este influyente clan político del departamento del Cesar.

Moreno y Romero dijeron que su decisión obedecía a que el “departamento del Cesar ha sido sometido por el unanimismo y la dictadura política que históricamente ha impuesto una ‘coalición de intereses’ ampliamente conocida en nuestra territorialidad”. Además, ambos se quejaron de las “particulares condiciones de intolerancia” que impiden unas mínimas garantías para hacer política en la región. Si bien los dos políticos no explicaron

a qué coalición de intereses se referían, la alusión se interpretó como el supuesto guiño de aprobación que “Jorge Cuarenta”, jefe paramilitar de la región, hizo a la candidatura de Hernando Molina, elegido gobernador para el período 2004-2006.

El hecho indicó el alcance de la influencia de este jefe de las AUC y los aliados políticos con los cuales estaba afirmando su predominio. Desde 1999, recién iniciada la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, Rodrigo Tovar Pupo, conocido también como Papá Tovar o “Jorge Cuarenta”, se puso a la tarea de organizar un frente de las AUC en esta región. El padre de Tovar Pupo fue oficial del Ejército. Él y su familia vivieron siempre bajo la sombra de su tío Edgardo Pupo, ex Gobernador del Cesar. La poca preparación académica de Cuarenta le impidió acceder a los beneficios de la burocracia oficial. El único cargo que ocupó fue el de Inspector de Precios, Pesas y Medidas del municipio de Valledupar, durante la segunda administración de Rodolfo Campo Soto, entre 1992-1994.

La vinculación de Papá Tovar con la ilegalidad comenzó con el tráfico de armas, y en esta actividad conoció a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. A mediados de los 90 fue detenido por la policía con un cargamento de armas, pero sus influencias locales y la amistad con el gobernador de entonces, Mauricio Pimiento, facilitaron su libertad. En Valledupar se afirma en voz baja que Papá Tovar salió del comando del departamento de policía del Cesar en el vehículo de la Gobernación. Luego de esto, Tovar Pupo se refugió en los municipios de Ariguani y Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena. Allí asumió la responsabilidad de ampliar el Bloque Norte de las AUC hasta el Cesar y el Magdalena, tarea que había iniciado Mancuso en Córdoba, Sucre y Bolívar.

La entrada de “Cuarenta” al escenario político regional significó el resurgir político de la familia Araujo Castro y el declive de los principales rivales de ésta, como sucedió con la familia Gnecco Cerchar. Esto fue claro en la víspera de la instalación de la Mesa de

Negociación en Santa Fe Ralito, el 1 de julio de 2004, cuando ordenó secuestrar al ex senador José Eduardo Gnecco Cerchar argumentando unas razones que puede que sean ciertas, pero que podrían aplicársele a él mismo. Según “Cuarenta”, con el secuestro quería: “llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre las actividades delictivas de estos delincuentes de cuello blanco, que hacen parte de la nueva generación de la familia Gnecco Serchar enquistada en una sociedad amedrentada por el poder intimidatorio del dinero y de las armas”.¹

Agregó que quería contribuir a que: “se corra el velo de la impunidad para que Colombia y el mundo descubran que la corrupción y la depravación de las costumbres políticas constituyen el principal detonante del conflicto armado, por encima de la confrontación militar que libran los actores irregulares. Que la justicia investigue y condene a los verdaderos causantes de la ruina económica social y moral de la nación”.

Además, denunció el origen ilícito de los recursos de la familia Gnecco: “narcotráfico, hurto agravado de vehículos, homicidios selectivos de empresarios, políticos y ciudadanos comunes en los departamentos de Cesar y Magdalena, saqueo y defraudación de los recursos públicos durante más de 20 años a la cabeza del desaparecido Jorge Gnecco Serchar”.

Ante la amenaza de persecución por parte del gobierno y la suspensión del salvoconducto para estar en Santa Fe Ralito de “Cuarenta” y Hernán Giraldo, el responsable de la operación y jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, el exsenador José Eduardo Gnecco es liberado a los pocos días.

Este episodio dejó al descubierto la enconada rivalidad política de las familias Araujo Castro y Gnecco Cerchar, la cual había marcado la política del departamento los últimos 20 años, y cómo el jefe paramilitar se había convertido en factor clave para el reacomodo político del departamento,

¹ Comunicado de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge Cuarenta’, sobre el secuestro del ex senador Jorge Eduardo Gnecco. Junio 29 de 2004.

El jefe paramilitar se había convertido en factor clave para el reacomodo político del departamento, luego de los cambios sufridos en los años 80 y 90 por las bonanzas de los negocios ilegales.

luego de los cambios sufridos en los años 80 y 90 por las bonanzas de los negocios ilegales. Como parte de ese reacomodo, y junto con la ampliación del Bloque Norte de las AUC, “Cuarenta” había ordenado el asesinato de Jorge Gnecco en agosto de 2001. Este, junto con su hermano Hugo, habían surgido como poderosos hombres de negocios –algunos legales y lo mayoría, menos- e influyentes hombres de la política, disputándole el poder a las familias tradicionales del Cesar. Lucas Gnecco, aparte de este nuevo poder, había sido gobernador a mediados de los 90. El secuestro del ex senador, era parte de esa reafirmación del poder por parte de esas alianzas entre los jefes de las AUC y unos sectores de las elites que vieron la oportunidad de volver a ganar preponderancia en el departamento.

El secuestro de Jorge Gnecco se justificó públicamente con consideraciones que pretendían defender el bien común, cuando en realidad no eran sino un punto de vista de otro de los protagonistas de la piñata armada en que se había convertido la región. La primera consideración afirmaba que existía complicidad del sector político de Gnecco con la guerrilla, acusación que en manos de las AUC se había convertido en excusa para cometer todo tipo de fechorías. La segunda, acusaba a este grupo de aprovecharse de las AUC para beneficio electoral y lucrarse con negocios de narcotráfico, hechos que tampoco eran ajenos a “Cuarenta” y sus aliados, y que más bien reflejaban la competencia por el control de la política y del narcotráfico. La tercera, sostenía que el grupo de Gnecco fomentaba la corrupción en los cargos públicos, que “él manejaba con su aureola de poder social y político que lo

hacía inmune,” algo de lo que “Cuarenta” y sus aliados tampoco estaban inmunes. Y por último, el jefe paramilitar señaló que la corrupción del Estado impedía impartir justicia y por eso las AUC se veían obligadas a hacerlo. Es decir, la típica explicación de que el Estado no funciona para justificar asesinatos y actividades delincuenciales, cubriéndolas con un manto supuestamente justiciero.

Sin embargo, ese poder armado no se ejerció sólo en contra de sus rivales inmediatos sino también para hacer propaganda armada como supuesto moralizador. En efecto, cuando el ex presidente del senado, Armando Pomárico, liberal

FOTO: CORTESÍA REVISTA SEMANA COPYRIGHT 2005



costeño, fue acusado de corrupción, un grupo de las AUC asaltó su finca “La Sonora” en el departamento del Magdalena, hurtó 162 reses, quemó algunas instalaciones y dejó un mensaje en la pared: “Por corrupto, si la justicia no lo corrigió, lo corregimos nosotros: auc”.³ Con este tipo de presión y amenazas Jorge Cuarenta ha logrado sacar de la competencia política a sectores políticos tradicionales o ha subordinado a otros, como es el caso del representante Jorge Caballero. Otros han preferido hacerse a un lado como el ex presidente del senado Miguel Pinedo Vidal, el representante Sergio Díaz Granados, la senadora Flor Gnecco, o el ex senador de la Guajira, Amilkar Acosta.

En recientes declaraciones, el representante del Partido Liberal a la Cámara por el Magdalena, José Joaquín Vives, señaló, refiriéndose a las condiciones políticas de la región: “...las credenciales que hoy tienen algunos congresistas están montadas sobre sangre de ciudadanos inocentes... todavía en el Magdalena no existen circunstancias para que las próximas elecciones puedan ser libres. En el departamento, hay que decirlo claro y sin tapujos, la democracia ha sido secuestrada y se mantiene secuestrada a través de una sociedad que se ha consolidado entre algunos grupos políticos y las autodefensas, alianzas que no le ha hecho ningún bien, ni a los unos, ni a los otros, ni al Magdalena”.⁴

Otra circunstancia que reveló la lamentable situación política de esta sección del país y la explotación económica de los recursos públicos por parte de los grupos paramilitares y sus aliados políticos locales han sido las denuncias sobre el robo de los recursos de la salud para los sectores más desprotegidos. En el comunicado de respuesta de “Jorge Cuarenta” a las acusaciones de desfalco de los dineros del régimen subsidiado de salud, aceptó haber recibido una comisión de 40 millones de pesos, pero señaló las responsabilidades de congresistas que hacían lo mismo. “Cuarenta” indicó que “lo que sí es verdad es que desde la vigencia de la Ley 100, hace 11 años, muchos congresistas, a través de testaferros, han saqueado los dineros de los pobres. Y eso lo saben el gobierno,

los medios de comunicación y el pueblo colombiano. Pero en ese caso, ahí sí guardan silencio. ¿Por qué? Porque les queda más fácil ponerle un nombre de un comandante de las autodefensas, en lugar de meterse con varios de los que dicen ser ‘connotados dirigentes políticos’”.⁵

Para las elecciones del 2006, “Jorge Cuarenta” pretende consolidar los grupos políticos que lo vienen acompañado, uno de los cuales se aglutina en el Movimiento Colombia Viva, también conocido como Grupo de las Provincias, en el departamento del Cesar. Los políticos asociados con el

jefe paramilitar pretenden repetir la táctica que les dio buenos resultados en las elecciones para Congreso en el 2002, pero esta vez en todos los departamentos de la Costa Caribe. En efecto, en el 2002, el departamento del Cesar fue dividido en dos subregiones. En cada una de ellas se acordaron los candidatos únicos, o por quiénes se podía votar y tenían permitido hacer campaña.

Esta modalidad abarató las campañas políticas de los políticos cercanos a las AUC, disminuyó la incertidumbre política y le otorgó a los jefes paramilitares un inusitado influjo electoral. A pesar de que esto se

conoce desde la misma realización de la elección, no ha habido investigaciones del Consejo Nacional Electoral ni de los organismos competentes. Dado que en las elecciones para Congreso de marzo de 2006 esta circunstancia parece que se va a repetir en una escala mayor, se ha planteado la necesidad de una veeduría internacional del proceso electoral, sobre todo en la Costa Atlántica. De no lograrse una adecuada vigilancia de esas elecciones, el riesgo de que una parte importante del país consolide redes políticas con representación en el congreso, vinculadas con organizaciones mafiosas y ligadas con los grupos paramilitares es bastante alto.

2 Comunicado público a la familia Gnecco y a la ciudadanía Samaria del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia auc. Agosto 24 de 2001.

3 El Heraldo, mayo 18 de 2000.

4 Diario del Magdalena, marzo 11 de 2005.

5 El Heraldo, septiembre 14 de 2004.

Los políticos asociados con el jefe paramilitar pretenden repetir la táctica que les dio buenos resultados en las elecciones en el 2002, pero esta vez en todos los departamentos de la Costa Caribe.